

República de Colombia  
Rama Judicial



Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Santiago de Cali, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022)

<b>RADICACIÓN:</b>	76001-23-33-000-2022-00697-00
<b>MEDIO DE CONTROL</b>	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – OTROS ASUNTOS
<b>ACCIONANTE:</b>	JHON JAIR SEGURA TOLOZA <sup>1</sup>
<b>ACCIONADO:</b>	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP <sup>2</sup>
<b>TEMA</b>	MODIFICACIÓN DE ESQUEMA DE SEGURIDAD
<b>DECISIÓN</b>	INADMITE DEMANDA -LEY 2080 DE 2021 <sup>3</sup>
<b>AUTO DE SUSTANCIACIÓN</b>	139

**MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**

**I. OBJETO.**

Corresponde al despacho examinar el asunto proveniente del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, al considerar que no tiene competencia para conocer del asunto al enjuiciarse un acto administrativo emitido por una autoridad del orden nacional que carece de cuantía (numeral 22 del artículo 152 del CPACA).

Se advierte que el señor Jhon Jair Segura Toloza, por conducto de apoderado judicial en el ejercicio de la nulidad y restablecimiento del derecho, contenida en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la Unidad Nacional de Protección UNP-.

**II. ANTECEDENTES.**

Como se indicó con antelación el trámite fue conocido inicialmente por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, y al revisar la demanda fue inadmitida a través de la providencia 405 del 15 de junio de 2022<sup>4</sup> por medio de la cual expuso las falencias que estimó que adolecía la demanda.

A su vez, la parte demandante, reiteró el día 13 de junio de 2022<sup>5</sup> la solicitud de la medida cautelar presentada en escrito separado al momento de impetrar la demanda.

<sup>1</sup> jhonjair220@hotmail.com  
<sup>2</sup> notificacionesjudiciales@unp.gov.co  
<sup>3</sup> Acta de Reparto – 8 de junio de 2022.  
<sup>4</sup> Archivo No. 5 expediente digital.  
<sup>5</sup> Archivo No. 4 expediente digital.

Posteriormente, la parte actora presentó dentro del término concedido el escrito de subsanación de la demanda<sup>6</sup>.

Luego el juzgado de origen profirió el auto No. 479 del 14 de julio de 2022 por medio del cual declaró la falta de competencia al considerar que se trata de un asunto sin cuantía y un acto administrativo emanado de una autoridad del orden nacional, en virtud de lo dispuesto en el numeral 22 de Ley 1437 de 2011 modificada por el artículo 25 de Ley 2080 de 2021<sup>7</sup>.

Ahora bien, es necesario revisar las pretensiones y la cuantía estimada en la demanda, objeto de estudio, se planteó los siguiente:

### **“CUANTÍA DEMANDADA**

*Esta demanda tendrá por cuantía un valor de \$ 25.475 000 (DOSCIENTOS CINCUENTA CUATROCIENTO (sic) SETENTACINCOMIL (sic) PESOS), dicho valor será exclusivamente para el pago de honorarios de abogados y daños causados en la demanda durante el tiempo de la adopción de la medida dejar de brindar la seguridad a mi prohijado conforme a la ley.*

*(...)*

### **PRETENSIONES**

*Sírvase usted señor JUEZ declarar la nulidad del OFI22-00014309 DEL 31 de marzo 2022 de asunto REPUESTA (sic) A SU DERECHO DE PETICION DE FECHA 28 DE ENEROO (sic) 2022 EXPERIDO (sic) POR LA SEÑORA DIRECTORA DE LA OFICINA JURIDICA MARIANTONIA OROZCO DURAN el mismo viola la constitución política de Colombia en las normas y artículos citados anteriormente*

*Sírvase usted señor JUEZ ordenar como la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION que en un término no superior a 5 días convoque al comité del CERREM para realizar un nuevo estudio de riesgo del SEÑOR JHON JAIR SEGURA TOLOZA A TIPO {4} REFORZADO EL MISMO DEBE SER IMPLEMENTADOS DE CONFIANZA Y ADEAMAS (sic) CON ARMAMENTOS (sic) Y APARA (sic) LOS MISMOS NO SE APLICARÁ LOS DOS AÑOS DE EXPERIENCIA POR EL PRINCIPIO DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE CONFIANZA.*

*(...)”*

En el escrito de subsanación<sup>8</sup> precisó en los siguientes términos las pretensiones y la cuantía, así:

*“Conforme a lo citado por su despacho, a continuación, se dará a conocer de manera clara y precisa las pretensiones de la demanda, conforme lo establece la norma:*

*Sírvase señor juez:*

<sup>6</sup> Archivos No. 10 y 12 expediente digital.

<sup>7</sup> Disposición aplicable a partir del 26 de enero de 2021.

<sup>8</sup> Archivo No. 10 expediente digital.

- 1- **DECLARAR**, la nulidad del oficio 22-0001-4309, fechado 31 de marzo de 2022, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición, del 28 de enero de 2022, expedido por la directora de la oficina jurídica de la UNP, la Doctora María Antonia Orozco Duran.
- 2- **ORDENAR**, a la UNP, que convoque al comité CERREM, en aras de realizar un nuevo estudio de riesgo al señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA, para garantizar los derechos que corresponden.  
(...)

Con base en lo descrito en el acápite anterior, se señala que la demanda se rige únicamente en contra de la UNP, toda vez que el comité CERREM no cuenta con personería jurídica para ejercer y comparecer por sí mismo, además de ser una entidad privada. (...)

Respecto de la cuantía, se solicita que la misma sea fijada por su despacho, en la etapa procesal oportuna.  
(...)

Siguiendo los lineamientos procesales y conforme a lo aducido por su despacho, mediante el presente escrito, se señala que se desiste de la siguiente pretensión:

La implementación de armamentos y la no exigencia de dos (2) años de experiencia, al momento de realizar el nuevo estudio de riesgo del señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA. (...)" (N.d.t.o.).

### III. CONSIDERACIONES.

#### **DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

##### **Factor territorial**

El numeral 2º del artículo 156 del CPACA en cuanto a la competencia territorial, señala: "En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar".

En el presente asunto, se observa que el demandante reside en la ciudad de Cali y la entidad tiene sede regional en este municipio, por tal razón se encuentra debidamente configurada la competencia por el factor territorial en el presente asunto, en este circuito judicial.

##### **Factor funcional**

Conforme a los artículos 104 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos administrativos, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, con base en la siguiente competencia asignada a

los Tribunales Administrativos “numeral 2º De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”, por su parte el juzgado de origen invocó el numeral 22 del artículo 152 Ib. “De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.”.

En el presente asunto, se pretende la declaratoria de nulidad del oficio 22-001-4309 del 31 de marzo de 2022, por medio del cual le indicó al demandante que no era susceptible la conformación del comité CERREM para recomendar la implementación, ajuste o finalización de medidas de prevención y protección puesto que el señor Jhon Jair Segura Toloza cuenta con el esquema de protección concedido a través de una medida cautelar ordenada por el Consejo de Estado, en el trámite de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y se no originó como consecuencia de la recomendación impartida por el comité CERREM – Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas.

Al respecto es necesario, establecer la competencia funcional de la Corporación, atendiendo al factor de la cuantía, observando la formulación de las pretensiones, así:

### **Factor Cuantía**

Cabe destacar que el factor objetivo de atribución de competencia se ha definido como el valor que representa lo perseguido con una demanda, esto es, su significación económica inmediata.

Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 1999<sup>9</sup>, consideró que la cuantía puede fijarse a través de los siguientes sistemas: **i) juris et de jure**<sup>10</sup>, **ii) dejar su valoración a criterio del juez**, **iii) confiar en la voluntad de las partes**, y **iv) prever un procedimiento previo para probarla**, ante lo cual se concluyó que nuestro sistema judicial “ha optado por combinarlos, pero dándole prelación a la posibilidad de dejar su cálculo a la voluntad de las partes<sup>11</sup>(...)”.

Así pues, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 al referirse a la competencia por razón de la cuantía en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previó que:

<sup>9</sup> C. Const. Sent. C-040 ene. 26/2000 M.P. Fabio Morón Díaz.

<sup>10</sup> Presunción absoluta, de hecho y de derecho.

<sup>11</sup> «La competencia de los jueces en algunos casos queda determinada de acuerdo con la cuantía de los negocios, la que aprecian los demandantes al proponerlos, pues, es una forma aceptable y que por lo menos permite obviar las dificultades que se presentarían con otra diferente, fuera de que aquellos están en mejores condiciones de apreciar el monto de sus pretensiones.». GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Julio, *Institución Procesal Civil Colombiana*, Editorial Teoría, Medellín 1946, página 87.

*"ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. <Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.*

*La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación de aquella.*

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.*

*En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.*

*En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

**PARÁGRAFO.** *Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda."*

De lo anterior, se desprende que en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es un **deber procesal** de la parte demandante realizar la estimación razonada de la cuantía, a tal punto que no puede prescindir de ella so pretexto de renunciar al restablecimiento del derecho.

Ahora bien, el escrito de demanda inicial señaló en el acápite de la cuantía que la misma se determinaba por los gastos de los honorarios de abogado y daños causados en la demanda "durante el tiempo de la adopción de la medida de dejar de brindar la seguridad...", y en el escrito de subsanación indicó lo siguiente: "Respecto de la cuantía, se solicita que la misma sea fijada por su despacho, en la etapa procesal oportuna."

En este sentido, es claro que la obligación de estimar razonadamente la cuantía al momento de la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, obedece a la necesidad de evitar que el demandante en forma caprichosa pueda alterar el factor objetivo de la competencia y modifique la misma, sin embargo dicha falencia no fue revisada por el juzgado de origen, toda vez que realizó una interpretación apresurada del escrito de subsanación al precisar que la misma no tiene cuantía, pese a que el juez tiene el deber de efectuar una interpretación

integral del escrito de demanda y la subsanación, en lugar de inferir lo pretendido por el demandante.

Cabe destacar que de acuerdo con los postulados de la jurisdicción administrativa el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, señala “*quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, **estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales** y probatorias previstas en este Código.*”, pues debe atemperarse a los términos legales concedidos, cumpliendo a cabalidad con las cargas en las oportunidades concedidas.

Como se indicó con antelación es necesario determinar la competencia de esta Corporación, y atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal que deben revestir las actuaciones judiciales, en esta oportunidad se expondrán los defectos meramente formales advertidos en el escrito de la demanda, con el objeto evitar una evaluación posterior para pronunciarse sobre aquellos puntos de los que adolece el petitum, así:

#### **De las pretensiones:**

Bajo estas premisas, es necesario que la parte aclare las pretensiones para establecer claramente si busca a título de restablecimiento del derecho alguna suma económica, pues afirmó la causación de daños derivados de la medida de seguridad, sin que se advierta la formulación de la pretensión en ese sentido, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2º de artículo 162 del CPACA “**Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.** Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.”.

De acuerdo con lo anterior, el apoderado de la parte actora deberá precisar el restablecimiento del derecho que busca, señalando los perjuicios originados con ocasión al acto administrativo censurado, exponiendo con exactitud y precisión lo qué se demanda, con el fin de mantener una coherencia del petitum, cuya proposición jurídica permita definir los puntos sometidos a litigio, tal como lo dispone el artículo 163 lb., prevé:

*“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.*

*Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.”*

En este orden de ideas, es preciso destacar que esta es una jurisdicción rogada y sin restar importancia a la labor interpretativa del juez administrativo dentro del proceso, no tiene la potestad de establecer la



competencia funcional, bajo supuestos, pese a que el demandante afirmó la causación de un daño, situación que debió esclarecer el juez, en lugar de remitir la actuación, y así lograr determinar el restablecimiento del derecho con claridad. Así las cosas, y ante la situación fáctica descrita se hace necesario calificar la demanda y el demandante deberá esclarecer las falencias expuestas.

Por su parte, el Consejo de Estado, ha señalado sobre el tema:

*“La facultad de interpretación de la demanda tiene como finalidad que, ante la falta de claridad del escrito contentivo de la demanda, se le dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales, con la precaución de no tergiversar la litis, de no suplantar la voluntad de quien demanda, de no modificar la causa petendi y el petitum planteado en el escrito inicial, porque ello llevaría al fallador a resolver pretensiones que no fueron planteadas o a dirimir el litigio con base en hechos que no fueron debatidos.”<sup>12</sup>*

## Concepto de la violación

Así mismo se encuentra que es un deber procesal del demandante elaborar una construcción lógica jurídica para demostrar la trasgresión de la norma que alega como infringida, pues en la demanda se **debe** confrontar el acto acusado con las normas que considera conculcadas y se debe exponer el motivo de cada afirmación. Este requisito no se llena, afirmando que se vulneraron determinadas disposiciones de carácter constitucional y/o legal, sino que debe determinar el alcance de la infracción, correlacionándolas con las omisiones o conductas de la administración, esto es el concepto de la violación.

Frente a la obligación de invocar en el escrito de demanda las normas violadas y el concepto de la violación al ponerse en consideración la legalidad de un acto administrativo, el Consejo de Estado<sup>13</sup> en un pronunciamiento reciente, precisó:

*“(…)*

*a) En relación con el juzgamiento de legalidad de actos jurídicos es pertinente advertir que por antonomasia la actuación de la jurisdicción contencioso administrativa se rige, por regla general, por un principio de “justicia rogada” el cual hace referencia a la carga procesal que debe asumir el actor cuando demanda la nulidad de un acto administrativo<sup>14</sup> lo que implica, **entre otros aspectos, lo atinente a la formulación de los cargos de nulidad contra el acto impugnado con expresión de las normas jurídicas que se estiman violadas y la exposición del respectivo concepto de quebranto normativo, obligación que el juez no debe ni***

<sup>12</sup> C.E. S. Tercera, Sent., ab. 23/2021 Rad. 2011-01293-01 M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

<sup>13</sup> C.E. S. Tercera, Sent. Mar. 30/2022 Rad. 2010-00025-01 M.P. Fredy Ibarra Martínez.

<sup>14</sup> Como acontece por ejemplo en los medios de control de simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad electoral y nulidad contractual.

**puede asumir por el demandante<sup>15</sup>.** Por el contrario, cuando la controversia consiste en el juzgamiento de responsabilidad patrimonial del Estado por razón de acciones, omisiones, hechos administrativos, operaciones administrativas o de ocupación de inmuebles de manera temporal o permanente por motivo de trabajos públicos el principio que determina la actividad de esta jurisdicción especializada es el de “iura no bit curia”, según el cual, las partes deben ponerle de presente al juez los hechos y es este quine debe determinar el derecho aplicable al caso y específicamente el título jurídico de imputación. Por consiguiente, en los eventos sometidos al principio de justicia rogada ante la omisión de tal obligación procesal por el actor en cuanto tiene que ver con la formulación de este nuevo cargo el cual no fue esgrimido con la demanda, **no puede el juez al momento de fallar el asunto suplir tal falencia y determinar o proponer las censuras o reproches de ilegalidad contra el acto cuya nulidad se deprecia con la demanda porque una actuación de tal naturaleza implica, necesaria e indiscutiblemente, estudiar nuevos cargos que no fueron planteados con la demanda lo que vulnera los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y derecho de defensa y contradicción de la parte demandada** -en este caso de Ecopetrol SA- en tanto que esta no tuvo la oportunidad de pronunciarse en tiempo real y efectivo sobre ese preciso nuevo aspecto.

b) En ese sentido la Sección Tercera de esta Corporación<sup>16</sup> ha señalado lo siguiente:

**“En las demandas de nulidad el concepto de la violación se constituye en referente para el ejercicio del control que la Constitución le ha deferido al juez de lo contencioso administrativo, de ahí que se diga que esta jurisdicción, es, en este aspecto, rogada, pues el juez no puede estudiar más de lo que se le propone en la demanda, es decir los motivos de violación alegados por el demandante y las normas que él mismo haya señalado como infringidas.”** (resalta la Sala).  
(...)

d) En el presente asunto, no le es posible al juez entrar a decidir sobre la legalidad de unos actos jurídicos con base en unos reproches o cuestionamientos de legalidad que no le han sido puestos a su consideración, esto es, adelantar un estudio con apoyo en una normativa que no le fue mencionada y por unos motivos no esgrimidos por la parte interesada, de manera que se desconocerían los parámetros suministrados en la demanda. (...). (Se destaca)

<sup>15</sup> Con excepción de aquellos eventos en los que de modo directo y principal esté de por medio la violación de un derecho constitucional fundamental de aplicación inmediata (véase la sentencia C- 197 de 7 de abril de 1999 de la Corte Constitucional que declaró exequible el numeral 4 del artículo 137 del Decreto –Ley 01 de 1984); así como también en los casos de responsabilidad extracontractual del Estado, esta Corporación ha sostenido que como la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad particular no le es dable a la jurisprudencia hacerlo, pues es deber del juez adecuar los títulos de imputación a cada caso concreto (véase la sentencia con radicación número 40028 del 29 de febrero de 2016 con ponencia del Dr. Ramiro Pazos Guerrero).

<sup>16</sup> Sentencia de 23 de abril de 2021, expediente no. 60.525, con ponencia de la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.



Por ello el mandatario judicial de la parte actora debe citar las normas que considere vulneradas y correlacionarlas con las omisiones o conductas de la administración, toda vez que la falta de concepto de violación dado el carácter de rogado de la jurisdicción impide un pronunciamiento apropiado y resulta contrario al debido proceso abordar el juicio de legalidad frente a motivos no alegados.

Vale la pena precisar que dentro de los deberes impuestos a través del Decreto 806 de 2020, en el artículo 6° se estableció la carga procesal enviar a la dirección electrónica de la parte demandada, copia del escrito y la demanda en forma simultánea, y dentro de las modificaciones relacionadas con la demanda en forma, se incorporó con carácter permanente en la Ley 2080 de 2021<sup>17</sup>, los siguientes aspectos:

*“Artículo 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así*

*7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.*

*8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo debe proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*

*En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado”.*

En cuanto al cumplimiento de la exigencia contemplada en el numeral 8° de la disposición transcrita, se tiene que el demandante, en el presente caso, no tenía la obligación de asumir esta carga procesal al haber solicitado la adopción de medidas cautelares, a pesar de ello se cumplió con tal exigencia (archivo No. 3).

En este sentido, habrá de inadmitirse la demanda conforme lo dispone el artículo 170 del C.P.A.C.A, con el objeto de que subsane las falencias descritas, consolidando la demanda y su subsanación en un solo documento el cual debe ser plenamente legible. acatando lo dispuesto en los artículos 103 157, 162 y subsiguientes del C.P.A.C.A. y los mandatos establecidos en los numerales 5, 6 y 14<sup>4</sup> del artículo 78 del C.G.P.

---

<sup>17</sup> Ley 2080 de 2021 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción”,

En consecuencia, después del estudio realizado, se

#### IV. RESUELVE:

**Primero:** Inadmitir la demanda de la referenciada, por las razones anotadas.

**Segundo:** Conceder a la parte actora el término de diez (10) días para que subsane las falencias anotadas, so pena del rechazo de esta. (Art. 170 CPACA).

**Tercero: ADVERTIR** a los sujetos procesales, que los documentos o memoriales que pretenda incorporar a la actuación deben ser remitidos al correo electrónico: **rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co**, y la **ventanilla virtual** en la plataforma SAMAI (<https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/>) con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales., señalando en el asunto del mismo los datos del proceso (número de radicado, las partes y el magistrado ponente), cualquier memorial y/o documento que sea enviado a un buzón diferente al informado con anterioridad no será tenido en cuenta, asumiendo las consecuencias desfavorables en el incumplimiento de observar dicho deber<sup>18</sup> artículos 2 Decreto 806 de 2020, Ley 2213 de 2022<sup>19</sup> y 186 CPACA.<sup>20</sup>

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)  
**EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**  
**Magistrado**

<sup>18</sup> Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Auto del 7 de febrero de 2022. Radicación No.: 11001031500020210406500 (5922).

<sup>19</sup> "Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones".

<sup>20</sup> C. E. S. Segunda. Auto Rad. 2017-00165-01 mar. 03/2022 Rocío Marín Jaramillo. "En primer lugar, de manera reciente, esta corporación ha tenido la oportunidad de analizar algunos casos en que las partes procesales han enviado memoriales o documentos a correos electrónicos diferentes a los oficiales habilitados por las autoridades judiciales, así: De la jurisprudencia en cita, se precisa que **I)** cualquier correo electrónico por el hecho de ser institucional no es apto para la recepción y trámite de los memoriales, porque ello, generaría un caos en la administración de justicia y una carga desproporcionada de verificar si las partes se pronunciaron en otro buzón digital; **II)** los sujetos procesales tienen la carga de utilizar como medio de comunicación la dirección electrónica establecida oficialmente para tales efectos por el juzgado o el órgano judicial colegiado respectivo, porque de no ser así esto entorpecería la prestación adecuada del servicio público y afectaría los principios de seguridad jurídica, eficiencia, celeridad y economía procesal y; **III)** los memoriales que se radiquen en un buzón electrónico distinto al que fue destinado para su recepción, y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben tenerse por no presentados."